

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

7842 *ORDEN de 22 de febrero de 1991 por la que se atribuyen los beneficios fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Valentín Ballarín Sánchez» (expediente HU/22), a favor de «Talleres Ballarín, Sociedad Limitada».*

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 5 de noviembre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» del 27), por la que se atribuyen los beneficios fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Valentín Ballarín Sánchez» (expediente HU/22), al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre, y Orden de este Departamento de 26 de junio de 1987, que declaró a dicha Empresa comprendida en polígono de preferente localización industrial, a favor de «Talleres Ballarín, Sociedad Limitada».

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Valentín Ballarín Sánchez» (expediente HU/22), por Orden de este Departamento de Economía y Hacienda de 28 de julio de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto) para el traslado y ampliación de una instalación dedicada a la actividad de cerrajería, y construcción de puertas y ventanas, etc., en el polígono industrial de Huesca, sean atribuidos a la Empresa «Talleres Ballarín, Sociedad Limitada», permaneciendo invariables las condiciones por las que se concedieron dichos beneficios y quedando sujeta la Empresa antes mencionada para el disfrute de éstos al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el anterior beneficiario.

Segundo.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que se comunica a sus efectos.

Madrid, 22 de febrero de 1991.—P. D. (Orden de 31 de julio de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

7843 *ORDEN de 27 de febrero de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 1.133/1988, interpuesto por la Administración General del Estado.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación número 1.133/1988, interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 17 de julio de 1987, que estimó el recurso contencioso-administrativo número 24.086, interpuesto por don Víctor Blasco Portolés y don Juan Martí Centelles, contra resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de enero de 1983, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra Acuerdo de la Delegación del Gobierno en CAMPSA de 12 de agosto de 1982 sobre autorización de adquisición de una parcela de terreno, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 28 de septiembre de 1990, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación promovido por el señor Letrado del Estado en la representación que le es propia, contra la sentencia de 17 de julio de 1987 dictada por la Sección Segunda de la Sala de Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia

Nacional, en los autos a que el presente rollo se contrae. Confirmamos íntegramente la expresada resolución sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta segunda instancia.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de febrero de 1991.—P. D. (23 de octubre de 1985), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA.

7844 *ORDEN de 6 de marzo de 1991 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Comercial de Maquinaria y Ferrería, Sociedad Anónima Laboral».*

Vista la instancia formulada por el representante de «Comercial de Maquinaria y Ferrería, Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal A-14226989, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 6.979 de inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

- Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por las operaciones de constitución y aumento de capital.
- Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
- Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo cuarto del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.—Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya